



Soberbia e ineptitud Política

POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Julio 13 - 1983

Muchos ciudadanos se preguntan, asustados, si la función que vieron durante el séptimo mes de la administración De la Madrid en el escenario nacional exhibió la soberbia o la ineptitud política de quienes deben encargarse del diseño y la operación de las acciones de ese género en torno del Presidente. Desde datos menores, como el que de pronto el titular del Ejecutivo se tope de manos a boca con una manifestación de profesores en el Zócalo (que por muy oficialistas que sean estaban en ese momento en trance de manipulación), hasta los mayores que enseña serán enumerados, causan esa inquietud entre un número cada vez mayor de mexicanos.

Tal vez el acto de prepotencia o incapacidad política principal sea el practicado ante las universidades, que no sólo ante los sindicatos universitarios. Estos quedaron marcados como las bestias negras de la sociedad mexicana. Todo el mundo laboral organizado fue en junio a la búsqueda de los salarios perdidos. Una comisión renuente a anticipar y aumentar los mínimos por encima de la previsión del 12.5 formulada desde enero para entrar en operación en julio se rindió también a las evidencias y estableció un incremento ligeramente mayor que el esperado. Casos hubo de incrementos muy voluminosos. Con huelgas o sin ellas, todo el que lo pidió se fue de regreso a su casa con algo más cada día con qué hacer frente a los estragos de la crisis. Todos, menos los universitarios.

Se trata de un acto injusto en sí mismo y hondamente peligroso para la estabilidad del sistema. Sólo con el profundo desdén que provoca la soberbia, o con la suprema ignorancia de desconocer cómo funciona la sociedad mexicana se pudo haber obrado de esa manera. Aun los adversarios de la huelga en las universidades, hasta los más activos opositores a los sindicatos en esas instituciones deben tener claro, a esta hora, que no fueron sólo esas agrupaciones las que resultaron agredidas, sino las universidades mismas. Y que si se quiso hacer lo contrario (es decir, como en el caso de la industria nuclear, golpear al sindicato) se pagó un precio demasiado alto, que tal vez no se advierta en el plazo inmediato pero que no dejará de repercutir. Se habría incurrido en la trampa del viaje ahora y pague después, en que se cede a la comodidad de no tener que entregar un enganche aunque más tarde haya que esforzarse por salir adelante con los abonos.

Para esta administración la educación superior pública no es prioritaria. Eso queda muy claro. Por eso no hubo un solo peso de aumento a los subsidios federales con el objeto de permitir que las universidades enfrentaran la justa exigencia de sus trabajadores. Concebir así las cosas encierra peligros que van más allá de una inadecuada percepción del orden en que deben gastarse los dineros públicos. Supone haber cedido a las teorizaciones de quienes ven en las universidades masivas sólo el deterioro de la enseñanza, a partir de un punto de mira elitista, en vez de advertir el fenómeno democratizador que las propias universidades hacen realidad.

Vista la situación con otro enfoque, con cinismo, invertir en las universidades era hasta ahora una adecuada compra de tiempo para el sistema, que demoraba la puesta en el mercado de una mano de obra más o menos calificada que no ejercía presión sobre el empleo tan pronto como hubiera podido hacerlo en otras circunstancias. De manera que, por donde quiera que se le vea, atender financieramente a las universidades tenía motivaciones poderosas, que ahora han dejado de tener eficacia.

Las consecuencias no tardarán en presentarse. Se observará un deterioro de la calidad de la enseñanza, pues aunque ésta no se finca sólo

en la abundancia de recursos, éstos son indispensables en muchos sentidos, especialmente en los que tienen que ver con las remuneraciones al personal. No es posible esperar rendimientos administrativos y docentes después del golpeo de junio como si eso no hubiera ocurrido. Eso lo sabe hasta la más ruda administración del trabajo. Por consecuencia, las universidades públicas entrarán en declive, en contraste con el auge que están adquiriendo las universidades privadas cuyo producto se aviene mejor con las necesidades y expectativas de quienes ahora ocupan los cargos mayores en el Gobierno.

Importancia análoga, si bien más restringida, tiene la actuación gubernamental (también soberbia e inepta políticamente) en el caso de los trabajadores nucleares. Aunque este sindicato dio más de una vez muestra de gran flexibilidad, si bien basada en principios muy claros, y su pertenencia al Congreso del Trabajo y su reciente cercanía con el líder de la CTM indicaban que es una agrupación con la que se puede entablar negociaciones, se decidió quebrarlo sin apelación, aunque en ello fuera la suerte de la industria nuclear. O al revés si se quiere, que para el caso es lo mismo: en aras de la eficiencia, admitida la inoperancia de Uramex, para curarla no se vacila en atacar de frente a un sindicato poderoso que naturalmente hará casi todo por defenderse.

En junio también se planteó el divorcio entre el sindicalismo oficialista más importante y el Gobierno, o el sometimiento más cabal de aquél respecto de éste. Se ha difundido la versión de que don Fidel Velázquez desayunó con el Presidente en la víspera del viaje que el dirigente obrero emprendiera a Oslo, horas después de la desautorización presidencial a la política social auspiciada por la CTM, y se califica de ingenuos o de amarranavajas a quienes creyeron ver en el discurso de Guadalajara una reprimenda pletórica de rudeza innecesaria contra una posición del movimiento obrero. Aun si hay un acuerdo secreto para engatuzar bobos, y ese desayuno se realizó para festejar el éxito de tal propósito, los operadores políticos del sistema deben recordar que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino que también debe parecerlo. Es decir, que se creó un efecto público que tal vez tenga una menor importancia que si correspondiera con la realidad pero que no por ello deja de estar presente en el ambiente político.

Debe contabilizarse también, entre los acontecimientos de junio, el enfrentamiento a tiros previo a las elecciones en ciudad Camargo, Chihuahua. Acaso el tiroteo haya sido inevitable, y se salieron de madre las tendencias bárbaras que prevalecen en el partido gubernamental. Pero al menos debió lamentarse el asunto, anunciarse averiguaciones precisas, castigar a los responsables políticamente, todo al mismo tiempo, y no aplicar sólo paños calientes o, lo que es peor, adoptar una actitud de perdonavidas, que soslaya la terrible importancia de que mueran ciudadanos metidos en afanes electorales.

Junio sirvió también para dar rienda suelta a tendencias desnacionalizadoras y privatistas en la economía. Mientras que sobra dinero en los bancos (y con ello se pone en grave riesgo la estabilidad del sistema de intermediación financiera, que no obtiene recursos suficientes para pagar los elevados intereses en curso en el mercado), se llama a inversionistas extranjeros a que compren barato lo que el país ha construido. Y se dibuja en mensajes profusamente publicados en la prensa, un retrato de la crisis en que todo parece asunto de voluntades particulares y de que se concrete el deseo de que todos nos portemos bien para que la crisis se aleje de nosotros. Y se apresura el pago de la indemnización a los banqueros, el único sector que parece prioritario para la presente administración.

Soberbia ineptitud. Ni para dónde hacerse.